

Gerardo Gutiérrez
Candiani

Una política económica contra la inversión y la legalidad

Lo visto alrededor de la toma de instalaciones de Ferrosur por el gobierno federal y la fallida venta de Banamex muestra la capacidad destructiva de una política económica –mezcla de ideología, improvisación y creciente menosprecio al Estado de derecho– que ha lastrado la inversión y el crecimiento durante todo el sexenio. En la recta final, pareciera que se le sube de nivel, para enrarecer aun más el entorno de negocios e inversión, y con ello, el panorama económico.

Desde este gobierno se ha hablado, desde el inicio, que así como Benito Juárez separó al poder religioso del civil, había que sacar al poder económico del político. El problema es que se ha ido al otro extremo: un intervencionismo generador de incertidumbre y parálisis, y peor aún, llevado frecuentemente con acciones que vulneran derechos de empresas y ciudadanos con patente discrecionalidad y arbitrariedad.

Lo hemos dicho recurrentemente en estos años, pero ahora es más oportuno que nunca. Sobre la crisis de los años 70, Gabriel Zaid señalaba cómo el Presidente Luis Echeverría anunció que, en adelante, la economía se manejaría desde Los Pinos: la primacía de los criterios políticos sobre los económicos. "Así fue y así

nos fue", decía: un empobrecimiento brutal del país. No se ve cómo ahora pueda haber un saldo distinto con la misma receta, pero con una economía mucho más compleja.

Eso es justo lo que refleja la cobertura de los medios de noticias de negocios, economía y finanzas más influyentes del mundo, a raíz de los casos Ferrosur y Banamex. Hablan, literalmente, de que el Gobierno asusta a la inversión, con la paradoja de que lo hace cuando hay una enorme oportunidad del país de atraer inversiones por el proceso de nearshoring.

Bloomberg señaló que la incautación "hace que los inversionistas desconfíen de México". Wall Street Journal, que el gobierno mexicano "dice que lo que es tuyo, puede ser suyo". Que ignora la ley para expropiar bienes cuando conviene a sus fines políticos. Que su "método" es "torcer



los brazos en cuartos traseros" y si "eso falla, llama a los militares".

Sobre la venta frustrada de Banamex, la cobertura de Reuters señala con claridad al intervencionismo gubernamental como la causa fundamental, en otra acción que alimentará la ansiedad de los inversionistas sobre México.

Estos medios, que leen quienes toman decisiones de inversión en el mundo, destacan, a partir de la consulta a empresas e inversionistas, que miles de millones de dólares en inversiones pueden estar detenidos, en espera de que a futuro haya mayor sensatez y pragmatismo. Retoman hechos recientes, como la compra gubernamental de plantas de Iberdrola, tras años de acoso regulatorio y discursivo, o las violaciones a derechos protegidos por la Constitución y el TMEC en el sector energético. Junto con ello, destacan el hostigamiento a la Suprema Corte de Justicia, que ha parado decretos y legislaciones inconstitucionales.

Exponen su extrañeza de que el gobierno intervenga y quiera imponer condiciones en todo tipo de decisiones de índole privada, como en la inversión de Tesla en Monterrey, que estuvo en riesgo por esta actitud. Bloomberg indica que, mien-

tras se debilita a las agencias regulatorias técnicas, el Ejecutivo Federal ha propiciado un entorno donde todo tipo de decisiones estratégicas de empresas puede requerir de la venia del poder político, sin ningún fundamento legal para ello. Como en los 70, apuntan, cuando eso ocurría y nadie sabía cuáles eran las reglas.

A cambio, no hay nada de beneficio para México. Al contrario.

Como señaló Darío Celis, uno de los más informados en el proceso de venta de Banamex. Pierde Citigroup, orillado a postergar la operación hasta 2025. También el único comprador viable que quedó ante las trabas que desde el arranque puso el Gobierno. El país, por la señal enviada al mundo. Y este Gobierno, que ni compra el banco ni obtiene impuestos.

Lo mismo aplica para la incautación a Ferrosur: ¿de qué le servirá a este gobierno y al país, si, por lo ocurrido, nadie invierte en los polos de desarrollo que se harían ahí?

Con el Aeropuerto Felipe Ángeles. Instalaciones casi sin usarse, operando con subsidio gubernamental y sin visos de que eso cambie, a cambio de la cancelación del Aeropuerto Texcoco, que pudo ser un

gran hub internacional, a un costo de al menos 5 mil 700 millones de dólares, según la Auditoría Superior de la Federación. Y todavía hay que pagar aproximadamente 200 millones de dólares anuales para cubrir la deuda con bonistas.

Desde este gobierno se dijo que la distribución de medicinas estaba marcada por la corrupción y la ineficiencia, sin probar nada. Que se encargaría de ello, porque era "como distribuir papitas". Dio paso al desabasto hasta en medicamentos para niños con cáncer. También dijo que, con el regreso de la política de precios de garantías de los 70, aumentaría la producción de granos "para la autosuficiencia". La paraestatal que creó para ello, Segalmex, hoy está en medio de un escándalo de fraudes por más de 15 mil millones de dólares.

Con esas cuentas y antecedentes, no extraña que, después de que el gobierno hablara de comprar Banamex, Citigroup rápidamente blindara el proceso por más de un año. Entre tanto, se descuidan tareas que sí corresponden al Estado, como seguridad, salud y educación.

Empresario